

## REPÚBLICA DE COLOMBIA



### RAMA JUDICIAL

### TRIBUNAL SUPERIOR DE MEDELLÍN

Medellín, cuatro (4) de mayo de dos mil veintitrés (2023)

La Sala Quinta de Decisión Laboral del Tribunal Superior de Medellín, integrada por los Magistrados CARLOS ALBERTO LEBRÚN MORALES (ponente), VÍCTOR HUGO ORJUELA GUERRERO y SANDRA MARÍA ROJAS MANRIQUE, cumplido el traslado de que trata el artículo 13 de la Ley 2213 de 2022, procede a dictar la sentencia que corresponde en este proceso ordinario laboral instaurado por EDUARDO MORENO HERNANDEZ contra la UNIDAD ADMINISTRATIVA DE GESTION PENSIONAL Y CONTRIBUCIONES PARAFISCALES DE LA PROTECCION SOCIAL -UGPP- (Radicado 05001-31-05-018-2018-00605-01).

### ANTECEDENTES

Eduardo Moreno Hernández demanda a la UGPP con el fin de que se declare la nulidad de la Resolución No. RDP 027883 del 12 de julio de 2018, mediante la cual la entidad le negó el derecho a la pensión de sobrevivientes causada por la muerte de su madre Eneida Moreno Hernández y, en consecuencia, se condene a la demandada a reconocerle y pagarle dicha prestación a partir del 22 de septiembre de 2012, fecha del fallecimiento; la indexación y las costas.

Como sustento de sus pretensiones, en síntesis, manifiesta: el año 2006 sufrió un accidente callejero que le generó una discapacidad motriz, obligándolo a utilizar una silla de ruedas de manera permanente; este percance le causó

afectaciones sociales y de pareja, toda vez que su cónyuge por la situación de discapacidad lo abandonó llevándose su núcleo familiar; a raíz de ello su madre lo acogió en su hogar brindándole apoyo psicológico, moral y económico hasta el día de su muerte; el 12 de junio de 2017 fue valorado por la Junta Regional de Calificación de Invalidez de Antioquia, quien emitió dictamen en el que determinó como pérdida de capacidad laboral el 70.37%, con fecha de estructuración el 23 de diciembre de 2006; a su difunta madre se le reconoció el derecho a la pensión vitalicia de jubilación por la Caja Nacional de Previsión Social mediante Resolución Nro. 013717 del 28 de noviembre de 1995, con retroactividad al 1° de enero de 1994; su madre falleció el 22 de septiembre de 2012, quien antes de eso era quien velaba por su sustento económico y moral dado su grado de invalidez para esa data, lo que lo hacía dependiente de ella; por esta circunstancia, le solicitó a la UGPP le reconociera la pensión de sobrevivientes a que tiene derecho, la que le fue negada por la entidad mediante Resolución No. RDP 027883 del 12 de julio de 2018, con el argumento que tuvo una relación marital entre los años 1987 y 2006 con la señora Elida Asprilla Perea, relación dentro de la cual procrearon a Andrés Eduardo, Margareth, Yisy Yiselis y Yisi Yoaris Moreno Asprilla; sin embargo, una vez sufrió el accidente fue abandonado por su familia cercana y quedó al cuidado y dependencia de su madre Eneida Moreno Hernández; cada uno de sus hijos tienen constituidos sus propios hogares, con hijos menores a cargo, sin mayores ingresos económicos, puesto que los hombres son labriegos que tienen su sustento económico cuando son contratados por días de la semana en la recolección de productos de pan coger y las mujeres son amas de casa y empleadas por días en oficios varios, por lo que ninguno de ellos le puede brindar alguna ayuda económica; actualmente sobrevive de la caridad de los vecinos, el bien inmueble donde reside era de su madre, pero no cuenta con servicios públicos domiciliarios al no contar con recursos para sufragarlos.

La entidad demandada dio respuesta oportuna al libelo. Se opuso a la totalidad de las pretensiones. En cuanto a los hechos dijo que no le constaban o que eran manifestaciones de la parte demandante frente a la aplicación de una norma que encierra una prestación. Como excepciones de fondo propuso las

de ausencia de vicios en el acto administrativo demandado, inexistencia de la obligación y prescripción.

El Juzgado Dieciocho Laboral del Circuito de Medellín, en decisión del 26 de abril de 2022, luego de hacer unas declaraciones, condenó a la UGPP al reconocimiento y pago al demandante de la suma de \$82.512.039, a título de retroactivo pensional causado entre el 22 de diciembre de 2013 y el 31 de marzo de 2022, suma sobre la cual se autoriza a realizar los respectivos descuentos en salud. A partir del 1° de abril de 2022, la accionada deberá continuar pagándole al accionante una mesada pensional en cuantía del salario mínimo legal mensual vigente en razón de 13 mesadas al año, sin perjuicio de los incrementos legales a que haya lugar; así mismo, al reconocimiento y pago de la indexación de las condenas. Por último, le impuso las costas a la demandada, fijándole como agencias en derecho la suma de \$4.125.602.

Inconforme con la decisión, la apoderada de la entidad accionada interpuso recurso de apelación, el cual le fue concedido. En la sustentación reprochó básicamente el que en el plenario no quedó demostrada la dependencia económica del demandante de la causante, indicando que éste tuvo una vida de pareja de donde se procrearon 4 hijos, hoy mayores de edad, teniendo estos el deber de alimentos con su progenitor conforme al artículo 411 del Código Civil Colombiano. Solicita que, en el caso de confirmarse la sentencia, se analice la condena en costas, por cuanto la solicitud de pensión de sobrevivientes se resolvió en tiempo negando la misma precisamente por la no demostración de la dependencia económica, de donde la UGPP obró conforme a derecho, de donde se concluye que solo mediante este proceso judicial se pudo demostrar tal hecho.

En el término pertinente, las partes presentaron sus alegaciones de segunda instancia, con argumentos semejantes a los expuestos en las etapas procesales transcurridas en primer grado.

### CONSIDERACIONES:

La Sala restringirá su estudio a los puntos objeto de apelación planteados por la apoderada recurrente en su apelación, conforme a las directrices que para el efecto traza el artículo 57 de la Ley 2ª de 1984, en concordancia con el artículo 35 de la Ley 712 de 2001, así como de las demás condenas impuestas a la UGPP en el grado de consulta, de conformidad con el criterio expresado por la Sala de Casación Laboral de la Corte Suprema de Justicia en sentencias del 26 de noviembre y 4 de diciembre de 2013, rads. 34552 y 51237, y la 40200 del 9 de junio de 2015.

No es tema de discusión al interior del plenario que el señor Eduardo Moreno Hernández es hijo de la señora Eneida Moreno Hernández, a quien le fue reconocida una pensión mensual vitalicia de jubilación por parte de la Caja Nacional de Previsión Social mediante Resolución No. 013717 del 28 de noviembre de 1995, a partir del 1º de enero de 1994. Que la señora Moreno Hernández falleció por causas de origen común el 22 de septiembre de 2012. Tampoco se discute que, mediante dictamen de la Junta Regional de Calificación de Invalidez de Antioquia del 12 de julio de 2017, se le determinó al señor Eduardo Moreno Hernández una pérdida de capacidad laboral del 70.37%, con fecha de estructuración del 23 de diciembre de 2006 y de origen común. A más de eso, que este procreó cuatro (4) hijos, quienes hoy son mayores de edad, y que la UGPP le negó la pensión de sobrevivientes que le reclamó por última vez el 21 de junio de 2018, en calidad de hijo mayor inválido, con el argumento que no dependía de su madre fallecida y que el deber de alimentos estaría a cargo de los hijos que son mayores de edad.

De cara a lo anterior, y atendiendo los argumentos de la alzada, el problema jurídico a resolver por esta Sala de Decisión se circunscribe a establecer si el señor Eduardo Moreno Hernández acreditó el requisito de la dependencia económica exigida por la ley que lo promueva como beneficiario de la pensión de sobrevivientes en su calidad de hijo inválido por el fallecimiento de la pensionada Eneida Moreno Hernández, acaecido el 22 de septiembre de 2012.

Pues bien, se tiene que la normatividad aplicable, acorde a la teoría del hecho causante, es la vigente al momento en que acaeció la contingencia asegurada, por lo que al haber ocurrido el deceso el 22 de septiembre de 2012, debe aplicarse lo dispuesto por el artículo 47 de la Ley 100 de 1993, modificado por el artículo 13 de la Ley 797 de 2003, para definir el derecho a la pensión de sobrevivientes deprecada, el cual señala los beneficiarios de la prestación, indicando textualmente lo siguiente de cara al tema:

*“Son beneficiarios de la pensión de sobrevivientes:*

*c) Los hijos menores de 18 años; los hijos mayores de 18 años y hasta los 25 años, incapacitados para trabajar por razón de sus estudios y si dependían económicamente del causante al momento de su muerte, siempre y cuando acrediten debidamente su condición de estudiantes; y, los hijos inválidos si dependían económicamente del causante, mientras subsistan las condiciones de invalidez. Para determinar cuando hay invalidez se aplicará el criterio previsto por el artículo 38 de la Ley 100 de 1993;”*

En el caso concreto, al estar debidamente acreditado en el plenario la calidad de hijo mayor de la causante, su estado de invalidez con fundamento en lo estipulado en el artículo 38 de la Ley 100 de 1993, conforme al dictamen de pérdida de capacidad laboral emitido por la Junta Regional de Calificación de Antioquia el 12 de julio de 2017, en la que estructuró tal condición desde antes de la data de fallecimiento de la pensionada fallecida, queda entonces pendiente por acreditar por parte del accionante para acceder al derecho pretendido la dependencia económica frente a su madre al momento de su muerte, sin que resulte dable para tal demostración la obligación de alimentos que puedan tener los descendientes frente a su progenitor, por cuanto esta es una exigencia que no trae consigo la ley de seguridad social, sino que es de aplicación en el campo civil, por lo que de entrada se desvirtúa uno de los argumentos expuestos por la apoderada de la parte accionada en la sustentación de su recurso así como de la entidad accionada al negar las solicitudes que le fueron presentadas por el demandante. Al respecto, téngase en cuenta lo señalado en la sentencia de la Sala de Casación Laboral de la Corte Suprema de Justicia con Radicado SL1704-2021, en la que se indicó:

*“Sobre la calidad de beneficiarios de la pensión de sobrevivientes que se discute en este caso, la Sala en sentencia CSJ SL, 7 feb. 2018, rad. 51770 explicó: “Ahora bien, el literal c) del artículo 47 de la Ley de Seguridad Social de manera clara y expresa prevé, como acertadamente lo indicó el sentenciador, que los hijos mayores inválidos también pueden acceder a la pensión de sobrevivientes, si dependían económicamente del pensionado y mientras subsista la invalidez; de manera tal que al estar plenamente demostrado el vínculo de consanguinidad respecto del causante y la minusvalía de la actora, causada ésta desde su nacimiento, resultaba pertinente otorgar la pensión reclamada”. Así, para la Corte el anterior criterio jurisprudencial es relevante en este asunto y desvirtúa el reparo de la censura, puesto que la norma no establece para la viabilidad de la prestación periódica por muerte en los casos del hijo mayor de edad inválido que no exista otra persona distinta del progenitor con la obligación legal de suministrar alimentos. En efecto, dicha exigencia no fue prevista por el legislador y no se acompasa con la garantía de la seguridad social como derecho fundamental irrenunciable ni con la protección especial que se debe brindar a las personas en situación de invalidez -artículos 13 y 54 de la Constitución Política de 1991-. En esa perspectiva, la Sala reitera que los únicos requisitos necesarios para ser beneficiarios de la pensión de sobrevivientes por la muerte del ascendiente en el caso de los hijos mayores de edad afectados de invalidez como es el caso de la accionante, son: el parentesco, el estado de invalidez y la dependencia económica respecto del progenitor. Por tanto, no se pueden imponer condiciones diferentes a las referidas que signifiquen obstáculos para la eficacia del derecho a la seguridad social».*

Ahora bien, para la doctrina, la dependencia económica *“... no es otra cosa que la situación de las personas que por su edad, nexo parental o incapacidad obtienen la subsistencia cotidiana por el trabajo o dinero que reciben de otra...”* (Guillermo Cabanellas, Diccionario de Derecho Usual, Tomo III, Ed. Heliasta, 24ª ed., pág. 88).

En otras palabras, bien puede entenderse por este concepto aquella situación en la cual una persona obtiene la satisfacción de sus necesidades básicas y fundamentales, es decir, su subsistencia esencial y digna, por la ayuda material y económica de otra.

Para que se materialice esta dependencia es necesario que el presunto beneficiario acredite unos requisitos puntuales, los cuales se pueden traducir en la existencia real de la ayuda, entendiéndose por aquella que se realiza de

manera efectiva al dependiente; la oportunidad de la ayuda, que se convierte en que ésta debe existir al momento de la muerte del afiliado o pensionado; la persistencia o continuidad, referida a aquella ayuda que se mantiene en el tiempo, no de aquella que se realiza de manera temporal o esporádica y, por último, la suficiencia de la colaboración, entendiéndose por aquella en que lo proporcionado debe tener importancia y significación para la vida del beneficiario, hasta el punto que pueda afirmarse que de su otorgamiento depende en forma razonable su subsistencia.

Precisamente por esto mismo, bien puede decirse que las meras colaboraciones o simples ayudas no tienen capacidad para dar lugar a que se hable de dependencia económica. Por el contrario, éstas, cuando provienen de personas diferentes al afiliado o pensionado, tampoco tienen la capacidad para desnaturalizar una verdadera dependencia económica, como mucho menos la tienen hechos accidentales o de esporádica ocurrencia en la vida de un potencial beneficiario. En sentido diametralmente opuesto, debe decirse que tampoco es necesario que estas ayudas sean totales o absolutas, es decir, que el beneficiario tenga que estar en situación de miseria o indigencia, como bien tuvo en precisarlo la Corte Constitucional en la Sentencia C-111 de 2006.

Bajo estos preceptos, se descende al caso concreto encontrando del análisis del material probatorio obrante al interior del proceso, que existe la carpeta del expediente administrativo dentro de la cual aparece la investigación administrativa que fue ordenada por la entidad demandada ante la solicitud pensional elevada por el señor Moreno Hernández, la misma que fue realizada por la firma “CYZA”, el 7 de noviembre de 2017, en la que luego de recibir varios testimonios de vecinos del actor, comprobar la validez del dictamen de pérdida de capacidad laboral emitido por la Junta Regional de Calificación de Invalidez de Antioquia, concluyó lo siguiente:

*“En virtud a los elementos de juicio con los que se cuenta al momento de la elaboración del presente informe, se indica que EXISTIÓ DEPENDENCIA ECONÓMICA del señor EDUARDO MORENO HERNANDEZ (solicitante) respecto de su madre la señora ENEIDA MORENO HERNANDEZ (causante), al momento del fallecimiento de la causante”*

Dicha conclusión guarda armonía con el testimonio rendido por el señor Wilson Mosquera Mosquera, quien fue enfático en señalar que conocía al accionante desde hacía más de 40 años, igual que a la madre, hermanos y familia de éste, y que luego del accidente sufrido por el señor Eduardo en el año 2006, se le terminó la relación de pareja que sostenía con la madre de sus hijos, por lo que fue a partir de ahí que la señora Eneida con su pensión se hizo cargo de los gastos de éste, dado que éste no había podido volver a trabajar por la condición de paraplejía con la que había quedado.

No desconoce esta Sala de Decisión las diferentes declaraciones extra juicio que obran al interior del plenario, y que si bien son contestes al señalar que el actor vivía con su madre hasta el momento de su muerte, no dan mayor claridad en cuanto a la manera específica de la ayuda que ella le brindaba, por cuanto lo que indican es de manera general.

Bajo estos parámetros, encuentra esta Sala de Decisión Laboral que la decisión dictada por la juez de instancia se ajusta a derecho, por cuanto reúne los elementos para considerar que el señor Eduardo Moreno Hernández le asiste el derecho a la pensión de sobrevivientes causada por la muerte de la pensionada Eneida Moreno Hernández, dando lugar a la confirmación de la sentencia venida en apelación, dando cuenta de ello en la parte resolutive de la presente decisión.

Ahora bien, analizada la prescripción de que tratan los artículos 151 del Código Procesal del Trabajo y de la Seguridad Social y el 488 del Código Sustantivo del Trabajo, debe indicarse que el accionante presentó una primera solicitud ante la entidad accionada deprecando la pensión de sobrevivientes el 22 de diciembre de 2016, tal como consta en la Resolución RDP 013937 del 31 de marzo de 2017, en la que le fue negado el derecho por presentar la documentación de manera incompleta, luego presenta una nueva solicitud el 21 de junio de 2018, la que fue atendida mediante la Resolución RDP 027883 del 12 de julio de 2018, negándole el derecho con sustento principalmente en la obligación de los alimentos de los descendientes con sus padres, y la demanda fue presentada el 6 de noviembre de 2018; lo que implica que haya



lugar a declarar el fenómeno de la prescripción a partir del 21 de diciembre de 2013 hacía atrás.

Siendo así, esta Corporación realizó nuevamente los cálculos respecto del retroactivo reconocido, encontrando que el mismo se ajusta a derecho, teniendo en cuenta que no se presenta reparo por parte de la parte accionada en cuanto al valor de la mesada pensional y el número de mesadas pensionales recibidas al año.

Frente a la condena impuesta por concepto de indexación, poco hay por decir por cuanto en economías inflacionarias como la nuestra, el solo paso del tiempo genera una pérdida de valor adquisitivo del dinero que debe ser compensado a quien lo sufre mediante el reconocimiento de tal concepto, en los términos indicados por la juzgadora de instancia.

En cuanto al reparo de la apoderada frente a las costas procesales, debe indicarse que el artículo 365 del Código General del Proceso establece para su imposición un carácter objetivo, esto es, “...*Se condenará en costas a la parte vencida en el proceso...*”, sin más miramientos, y siendo que la entidad accionada resultó vencida, habrá lugar a confirmar esta condena.

Las costas de esta instancia a cargo de la parte accionada. Como agencias en derecho se fija la suma de un (1) salario mínimo legal mensual vigente.

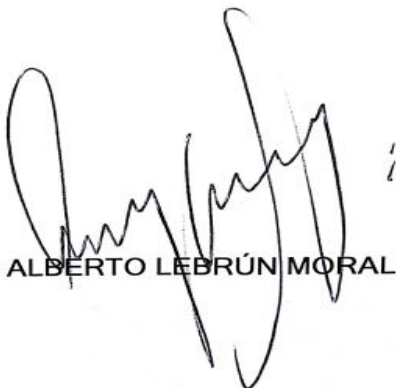
### DECISIÓN:

En mérito de lo expuesto, el Tribunal Superior de Medellín, Sala Quinta de Decisión Laboral, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la Ley, **CONFIRMA** la sentencia venida en apelación y consulta, incluido lo relativo a las costas.

Las costas de esta instancia a cargo de la parte demandada. Como agencias en derecho se fija la suma de un (1) salario mínimo legal mensual vigente.

Notifíquese por EDICTO.

Los Magistrados,



CARLOS ALBERTO LEBRÚN MORALES

VÍCTOR HUGO ORJUELA GUERRERO

SIN FIRMA POR PERMISO AUTORIZADO



SANDRA MARÍA ROJAS MANRIQUE

REPÚBLICA DE COLOMBIA  
RAMA JUDICIAL DEL PODER PÚBLICO  
SALA LABORAL



SECRETARÍA  
EDICTO

El Secretario de la Sala Laboral del Tribunal Superior de Medellín:

**HACE SABER:**

Que se ha proferido sentencia en el proceso que a continuación se relaciona:

<b>Radicación:</b>	<b>05001310501820180060501</b>
<b>Proceso:</b>	<b>ORDINARIO LABORAL</b>
<b>Demandante:</b>	<b>EDUARDO MORENO HERNANDEZ</b>
<b>Demandado:</b>	<b>UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE GESTION PENSIONAL Y CONTRIBUCIONES PARAFISCALES DE LA PROTECCION</b>
<b>M. P.</b>	<b>CARLOS ALBERTO LEBRUN MORALES</b>
<b>Fecha de fallo:</b>	<b>4/05/2023</b>
<b>Decisión:</b>	<b>CONFIRMA</b>

El presente edicto se fija por el término de un (01) día hábil, con fundamento en lo previsto en el artículo 41 del CPTSS, en concordancia con el artículo 40 *ibídem*. La notificación se entenderá surtida al vencimiento del término de fijación del edicto.

Se fija hoy 5/05/2023 desde las 08:00 am. y se desfija a las 05:00 pm.

**RUBÉN DARÍO LÓPEZ BURGOS**  
Secretario